

**La obligación europea de reconocer que, sin un acuerdo estratégico con América Latina y el Caribe, su proceso de transición verde será un fracaso por falta de recursos e innovación: los fondos Next Generation EU una oportunidad compartida**

Recibido 21 septiembre 2022-Aceptado 05 diciembre 2022

Octavio Velayos González\*  
Universidad de Salamanca. España  
octavio@usal.es

**RESUMEN:** La pandemia lejos de alejar los objetivos de sostenibilidad los ha acelerado a través de un paquete de ayudas sin precedentes de la Comisión Europea con el Plan Recuperación para Europa Next Generation EU de 750.000 mil millones de euros donde al menos el 37% debe ir destinado a proyectos medioambientales que agilicen el proceso de descarbonización. El plan de la UE contra la recesión provocada por el COVID-19 ha tenido en cuenta la alarma climática, por el aumento de las temperaturas de la superficie de la tierra de 1,5 °C, el aumento del nivel del mar, la disminución de la nieve y el hielo ártico, el desplazamiento de especies y la aparición e intensificación de fenómenos atmosféricos

**ABSTRACT:** The pandemic far from distance sustainability objectives has accelerated them through an unprecedented European Commission aid package with the European Next Generation European Recovery Plan EU of 750 billion euros, where less than 37% should go for environmental projects that will aggravate the decarbonisation process. The EU plan against the COVID-19 recession has taken into account climate alarm, the rise in land surface temperatures of 1.5 °C, sea level rise, decreased snow and arctic ice, the shift of species and the emergence and intensification of extreme atmospheric events that have facilitated the spread

\*Profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Salamanca, España.

*extremos que han facilitado la propagación del virus. Este escenario tan preocupante ha llevado a la Comisión Europea a comprometerse aún más con la transición energética para 2050, este objetivo exigirá la colaboración público-privada a través de planes estratégicos de sostenibilidad que serán determinantes para las democracias constitucionales.*

**Palabras clave:** Sostenibilidad, constitución, universidad, déficit, público-privado.

*of the virus. This very worrying scenario has led the European Commission to a further commitment to the energy transition by 2050, this objective will require public-private collaboration through strategic plans of sustainability that will be critical to constitutional democracies.*

**Keywords:** Sustainability, constitution, university, deficit, public-private.

**SUMARIO:** Introducción. 1. La necesidad de una alianza geopolítica-geoestratégica de la UE con América Latina y el Caribe para hacer viable su Pacto Verde Europeo. 2. El sector empresarial en España ante los fondos Next Generation EU: Una oportunidad para el desarrollo sostenible. 3. La gestión de los fondos Next Generation EU y su control sobre los objetivos de sostenibilidad: Un binomio inseparable. 4. El fracaso del sector público español en la ejecución de los fondos NGEU por los déficits institucionales del Estado. 5. Las universidades como nexo unión de ambos hemisferios y como mecanismo de control de los fondos Next Generation EU. 6. La participación en los fondos Next Generation EU de América Latina y El Caribe por medio de una alianza con España a través del diseño de un PERTE. Conclusiones. Fuentes de consulta.

## Introducción

Los programas económicos del Plan Next Generation EU que diseño la UE son una gran oportunidad para España que recibirá 140.000 mil millones de euros en los próximos 6 años, con unas transferencias directas de 72.700 millones de euros. España recibió en 2021 ayudas del Next Generation EU (NGEU), por valor de 10.000 millones de euros, el dinero llega un año después de entrar en vigor los presupuestos del 2021, en las que ya el Gobierno planificó gastar 27.000 millones de euros procedentes de este Fondo. Un año después, el Ministerio de Hacienda no ha dado ninguna cifra de como se ha gastado ese dinero, aunque el Ministerio de Economía apuntó que 19.013 millones de euros ya están autorizados, 17.228 millones de euros comprometidos y 11.247 millones de ellos asignados a las Comunidades Autónomas. Estas previsiones tan optimistas del Gobierno al cierre del 2021 se venían abajo y se quedaban sin ejecutar 12.000 millones de euros, que supuestamente se deberán acumular en el presupuesto de 2022. El gran problema es que, si antes del 2023 no están listas todas las convocatorias, se podrían perder ayudas por la excesiva burocracia

e ineeficiencia; pasividad denunciada por la Comisión Europea que a término de 2021 sostenía que solamente se habían desembolsado un 42% de todos los fondos estructurales planificados en los últimos siete años para España.

La clave, por tanto, para garantizar una buena gestión de los recursos, será un buen diagnóstico de los problemas que limitan el crecimiento y el bienestar en España. Una cosa parece clara: los modelos de gestión pública no están preparados para este desafío por su burocracia rígida e inoperante, al no contar con directivos profesionales capaces de cumplir objetivos con autonomía y con rendición de cuentas, debido a una Administración más propia del siglo pasado. Es en este punto, donde si queremos invertir bien los fondos europeos, las Administraciones públicas necesitaran la colaboración de las principales empresas estratégicas de España que cuentan con los planes adecuados, con una dirección clara y ambiciosa de iniciativas público—privadas con la Universidad como nexo de unión. Fruto de esta colaboración debe nacer un marco institucional formado por expertos del sector privado que asesoren sobre proyectos sostenibles; de no ser así terminarán triunfando proyectos antiguos y obsoletos que servirán únicamente para capturar rentas. Ante este fracaso institucional de implementación de los fondos, como el artículo demostrará, se está convirtiendo en vital un giro radical en la gestión, desechar el modelo de subvención, para adoptar un modelo de inversión, capaz de crear activos de capital, es decir, transformar realmente la economía española, al no consumir meramente los fondos Next Generation EU con necesidades del presente, sino destinarlas a satisfacer necesidades en el futuro, claves para el crecimiento económico y el progreso.

Ante esta necesidad de crear activos de capital, Iberoamérica deberá tener un rol protagonista, debido en gran parte a que la actual coyuntura mundial de crisis e incertidumbre energética, por la invasión rusa a Ucrania está provocando enormes tensiones inflacionistas, alzas de precios de productos básicos e interrupción en las cadenas de suministro globales. Esta inestabilidad sitúa a América Latina y el Caribe como la región clave para la transición climática por su potencial en las energías renovables. Sin embargo, su talón de Aquiles se sitúa en la financiación. Por ese motivo, España como miembro destacado de la UE debe convencer a sus socios europeos que los países iberoamericanos deberán ser el principal foco de las inversiones de la eurozona, con un rol claro de políticas públicas basadas en promover el acceso al crédito y al capital a largo plazo, dando seguridad jurídica a la región. Convencidos de esta prominencia, el Gobierno de España, coincidiendo con la presidencia española de la UE en el segundo semestre de 2023, tendrá como objetivo principal, potenciar las relaciones entre la UE e Iberoamérica, y el primer paso de esta profundización de las relaciones institucionales, ha sido el papel protagonista de España en la reunión con los ministros de Exterior de la UE y la CELAC de 27 de octubre de 2022 en Buenos Aires, para fortalecer “La Paz y el Desarrollo Sostenible” con tres áreas temáticas:

la primera, la recuperación económica sostenible; la segunda, la innovación y la lucha contra el cambio climático; y por último, la cooperación en materia de seguridad y gobernabilidad, y promoción y protección de los derechos humanos.

Con base en estos antecedentes, el artículo buscará demostrar cómo solo América Latina y el Caribe pueden ser la alternativa real a largo plazo para que la UE deje de depender de Rusia en materia energética, lo cual reforzaría la autonomía geoestratégica de ambas áreas económicas.

## **1. La necesidad de una alianza geopolítica—geoestratégica de la UE con América Latina y el Caribe para hacer viable su Pacto Verde Europeo**

Teniendo presente esta oportunidad histórica de inversión sostenible de los fondos Next Generation EU, con una dotación de 1,8 billones de euros, en un contexto de gran incertidumbre a nivel global, por la profundización de los problemas estructurales de la economía internacional; ha terminado convirtiendo América Latina y el Caribe en esenciales para este cambio de paradigma europeo, por su enorme potencial verde, puesto de manifiesto por la iniciativa RELAC (Renovables in Latin America and the Caribbean), con 15 países firmantes de la región, que estableció que para 2030 el 70% del consumo de energía eléctrica vendrá de las energías renovables. Este objetivo es superior al Fit For 55, para la UE, que tiene el objetivo de reducir las emisiones en 2030 al menos en un 55% respecto a 1990, junto a la obligatoriedad de que un 40% del consumo bruto de energía provenga de las renovables. Ante estos desafíos climáticos, los europeos debemos ser conscientes que mientras para la eurozona es irrealizable sin una alianza estratégica con América Latina y el Caribe, para Iberoamérica si es un objetivo posible, debido a sus excelentes condiciones para la energía fotovoltaica, sobre todo Chile, Perú, México y Argentina, con unos promedios diarios de generación que superan los 4,5 Kilovatio hora/Kilovatio pico; a esta ventaja comparativa se une su capacidad en hidroenergía con casi 200 GW, en energía eólica 34,5 GW y en bioenergía 21,8 GW. Esto genera unos excedentes inigualables a nivel global que ha permitido que la energía renovable instalada en la región sumara a finales de 2021, 291.770 megavatios (MW).

A este futuro tan esperanzador para una transición energética exitosa se une su compromiso con la defensa de los derechos humanos, a través del “Acuerdo de Escazu” de 4 de marzo de 2018, que entró en vigor el 22 de abril de 2022, cuando fue ratificado por 12 países. Se trata de un instrumento internacional inédito e histórico para la región, siendo el primer tratado en el mundo en establecer disposiciones específicas para la promoción, protección y defensa de los derechos humanos en asuntos ambientales, por medio, de un acceso preciso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma

decisiones y acceso a la justicia. Además, este acuerdo, obliga a los Estados firmantes a garantizar un entorno seguro y propicio, en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y definen los derechos humanos en asuntos ambientales puedan realizar su labor sin amenazas, ni restricciones. Esto será vital para la región, pues como señaló el último informe de “Global Witness”, Iberoamérica registra cerca de mil doscientos activistas asesinados. Estas acertadas políticas ambientales, están permitiendo a la región que más de una cuarta parte de la energía primaria proceda actualmente de las energías renovables, el doble la media mundial, pues mientras que a nivel mundial la bioenergía representa solo el 4%, en América Latina y el Caribe representa el 10%.

Ahora bien, aun cuando el camino es el correcto, como ha señalado el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), no hay que obviar que se necesitara una gigantesca inversión, pues para lograr estos objetivos se necesitaran aproximadamente 226.000 000 mil millones de dólares por año, siendo capital la inversión exterior, y donde actualmente la UE está jugando un papel muy importante a través del Banco Europeo de Inversiones (BEI), por medio de su rama de desarrollo “BEI Global”, que dispone de líneas de crédito para impulsar el desarrollo de programas de energía renovable y eficiencia energética, por medio, de instrumentos de financiación “Sustainability Linked”, para mitigar los efectos del cambio climático, y que actualmente financia en América Latina y el Caribe el 65% del total de las inversiones en renovables de la región.<sup>1</sup>

España ante esta realidad no puede mostrarse pasiva y deberá adoptar un papel protagonista en la región como uno de sus principales inversores desde una doble faceta: en primer lugar, haciéndoles partícipes directos de los fondos Next Generation EU, con el diseño de un Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica, (PERTE), para liderar una inversión conjunta en América Latina y el Caribe; y en segundo lugar, una vez constatada su incapacidad institucional interna para implementar de forma eficiente los fondos Next Generation EU, deberá buscar un giro copernicano, dando protagonismo a América Latina y el Caribe. No es ocioso recordar que un acuerdo de esta naturaleza no se movería en el desierto, teniendo presente, que la CEPAL y la cooperación alemana, han creado e implementado el “Programa de Cooperación Regional CEPAL—BMZ/GIZ”, encaminado a desarrollar ciudades inteligentes inclusivas y sostenibles (CISI), en el marco de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe. Teniendo presente este antecedente, España debe liderar un acuerdo estratégico de la UE

<sup>1</sup> Esta iniciativa busca promover mercados integrados para las finanzas ambientalmente sostenibles y así movilizar a los inversionistas internacionales, por lo que establece un trabajo conjunto entre los países para garantizar una mayor coherencia entre los diferentes marcos y herramientas de los mercados de capitales. Véase [en línea] [https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/international-platform-sustainable-finance\\_en](https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/international-platform-sustainable-finance_en).

con Iberoamérica, con los fondos Next Generation EU como protagonistas, donde la región lograría unos instrumentos de planificación económica correctos; asimismo contarían con la “Plataforma Internacional de Finanzas Sostenibles”, desarrollada por las instituciones europeas, con el objetivo de aumentar las inversiones sostenibles y ambientales de naturaleza privada. A su vez, esto posibilitaría no poner en riesgo el restringido espacio fiscal que tienen los países de la región, para así poder aumentar la inversión pública en energía renovable en las magnitudes que se necesitan para lograr una transición energética exitosa. Por su parte, América Latina y el Caribe aportarían a la eurozona todos los recursos clave para que su Pacto Verde Europeo no sea un rotundo fracaso.

## **2. El sector empresarial en España ante los Fondos Next Generation EU: Una oportunidad para el desarrollo sostenible**

Resulta imprescindible que los poderes públicos en España hagan un enorme esfuerzo técnico-jurídico en la gestión y el control de estas ayudas públicas, que se deberán dirigir a empresas verdaderamente estratégicas y viables para así poder realizar una verdadera revolución en la distribución de renta. Teniendo en cuenta que los Fondos Next Generation EU llegarán a España en la fase de estímulo del ciclo económico, para lo que será necesario afrontar y dar respuesta a cada etapa del ciclo, para que de esta forma las políticas sean verdaderamente contracíclicas con el diseño de estrategias empresariales a largo plazo, sobre los sectores económicos más competitivos que precisaran compromisos de inversión, para aprovechar mejor los recursos y capacidades de nuestras empresas más competitivas, a través de las cuales lograr explotar de forma más eficiente las economías de escala y limitando tras ello, los riesgos del mercado (Geringer, Tallman y Olsen, 2000: 51-81).

Partiendo de este análisis, hay que tener en cuenta que las grandes empresas en España, es decir, las que cuentan con más de 250 asalariados, solamente hay 4.800 que dan empleo en torno a 5,35 millones de personas. Esto hace de estas empresas un sector estratégico de la economía por su internacionalización, que ha conducido a todos los países sin excepción apoyarlas sobre todo tras la COVID-19, y España no debe ser una excepción, especialmente sobre aquellas empresas estratégicas que se sitúan como punto de lanza de la economía española situadas sobre todo en Latinoamérica (Casilda, 2021: 73-91). Ante este desafío para la sostenibilidad, nuestro tejido industrial más competitivo deberá luchar sin complejos por liderar esa “Cuarta Revolución Industrial”, y uno de nuestros sectores más competitivos es el de las infraestructuras y cambio climático, que es nuestro Fintech y que debe ser el motor de investigación, innovación y conocimiento indispensables, no solo para España sino para el futuro de la UE, como ha demostrado la crisis del Covid-19, que ha apuntalado más aún la necesidad de una colaboración público-privada. Por su parte la

Comisión Europea, con el pacto verde ha diseñado la estrategia de recuperación y crecimiento económico post covid-19, mediante inversiones en soluciones sostenibles que logren el compromiso con los ciudadanos, como definió la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen: *"es una excelente oportunidad de aprovechar la crisis de la pandemia para convertir la economía europea en más sostenible, resiliente y digital"*. Estas palabras se veían apoyadas por unos puntos esenciales sobre los que debía girar este Pacto Verde: a) energía limpia; b) industria sostenible; c) renovar y construir edificios sostenibles; d) movilidad sostenible; e) eliminar la contaminación (Martin, 2020).

Este Pacto Verde movilizará 100.000 millones de euros, como mínimo, durante el periodo 2021-2027, para la reconstrucción y renovación del modelo económico europeo, y debe ser está la gran apuesta por la sostenibilidad española, para acelerar la transición ecológica y las inversiones en energías limpias. Para hacer posible este objetivo, será necesario diversificar geográficamente nuestras exportaciones y nuestra capacidad de construir infraestructuras, debido sobre todo a la enorme dependencia de nuestra economía de la zona euro que representa un 53,2% del total de nuestras exportaciones y siendo lo más preocupante que tanto América Latina, como EEUU, solo representan un 9,9%, debiendo ser esta nuestra principal motivación buscando incorporar a España a las cadenas de valor globales permitiendo así diversificar las fuentes de abastecimiento y crear marcos cooperativos para el suministro de productos estratégicos (Díaz, Gandoy y González, 2020: 11-33). En este escenario tan cambiante, donde las empresas españolas cuentan con dos grandes fortalezas, la primera, que nuestra industria tras superar la crisis del 2008, mostró su gran competitividad que quedó ratificada tras el hundimiento por la pandemia en 2020. La segunda es la existencia de un marco europeo muy favorable para ir logrando la autonomía tecnológica, productiva y energética, tanto de China y como de Rusia. Un ejemplo de esta integración tan importante para España, ha sido el acuerdo que la UE alcanzo con México, el 28 de abril de 2020, que concluyó con las negociaciones de un *"Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación"*, relativo al acceso comunitario a los mercados de contratación pública mexicanos a nivel subfederal, que supone que los productos intercambiados entre la UE y México estarían libres de arancel al 99%. Además, las partes se comprometían a respetar las obligaciones derivadas del *"Acuerdo de Paris"* sobre el cambio climático, esto nos ha permitido ocupar la primera posición como emisor y receptor de inversiones hacia y desde México tras EEUU (Feás, 2021).

### **3. La gestión de los fondos Next Generation EU y su control sobre los objetivos de sostenibilidad: Un binomio inseparable**

Las políticas públicas bien diseñadas y convenientemente evaluadas mejoran el bienestar no solo económico, sino también la sostenibilidad institucional y democrática. Los recursos movilizados por las instituciones europeas, exigirán proveer unos *inputs* rigurosos y objetivos a los gestores y responsables no solo de estas políticas públicas, sino a un sector privado que debe ser proactivo. En Reino Unido, por ejemplo, para impulsar el papel de la evaluación en el proceso de gestión de políticas públicas en 2013, su Gobierno lanzó la iniciativa "What Works Network", con la que se promovía la creación de una red de centros independientes y asociados en diversas áreas que se comprometían a impulsar la oferta y la demanda, recolectando y sintetizando los datos sobre la eficacia de estas políticas públicas, tratando de hacer frente a los vacíos de análisis de la Administración pública incapaz de poder analizar todo el proceso, para lograrlo estas Agencias se cofinanciaron con recursos públicos y privados. En EEUU, en 2010 se reformó la "*Government Performance and Results Act*", que obligaba a las Agencias y Departamentos federales a desarrollar proyectos públicos sobre la base de indicadores con datos, planes estratégicos y memorias anuales de desempeño, cuya información ha de justificar las solicitudes de asignación presupuestaria. En cada Agencia Federal y Estatal se nombraba: 1) Un director de Operaciones y 2) Un director de Desempeño. Para así asegurar un mayor nivel de implementación de estas políticas públicas ex ante y ex post, con esto se obligaba a las Agencias a desarrollar políticas basadas en evidencia y planes de evaluación. La nueva Administración Biden ya ha mostrado su determinación para consolidar esta práctica con planes a largo plazo de cuatro años (Bertranou, 2019: 151-188).

La UE sigue siendo un desierto en estos análisis de las políticas públicas, tal es así que en 2017 el Consejo Europeo formuló recomendaciones expresas a España, Bélgica, Francia, Portugal y Malta para que crearan Agencias de Control y revisión integral del Gasto Público. A raíz de esta recomendación el Gobierno de España encomendaba a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) la revisión integral del gasto público solicitada por las instituciones europeas. Sin embargo, la AIReF carecía de los recursos humanos e infraestructura de gestión de los datos, ni información que requerían este tipo de análisis en el ámbito, no solo macroeconómico y presupuestario, sino en el jurídico-constitucional sobre la sostenibilidad democrática propias del ámbito académico completamente marginado en este examen (Casado y Del Pino, 2021: 14-36). Solo desde la colaboración entre organismos evaluadores públicos y privados que deberán trabajar de la mano cubriendo todos los ámbitos de la evaluación, para lo cual se requerirán unos

instrumentos, competencias, especializaciones y metodologías muy distintas, se logrará una implementación sostenible y eficiente de los fondos Next Generation EU.

Esta colaboración podría ayudar también analizar correctamente la enorme riqueza de datos administrativos y económicos que existen en España y que no se analizan de manera correcta debido a la falta de comunicación entre los distintos organismos. Hay además que tener en cuenta que los desembolsos de la UE en forma de transferencias y préstamos estarán condicionados a la prestación por parte de los Estados miembros de Planes de Recuperación y Resiliencia nacionales que incluyan una descripción pormenorizada de las reformas e inversiones proyectadas, en línea con las prioridades marcadas por la UE. En busca de lograr estos objetivos, el Gobierno aprobó el Real Decreto-Ley 36/2020 de 30 de diciembre por el que se aprobaban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, teniendo en cuenta el ámbito temporal comprendido los años 2020-2027; y el ámbito material, elaborando un programa coherente de reformas e iniciativas de inversión que tengan en cuenta los sectores estratégicos de la economía española que logren fomentar: la cohesión económica, social y territorial, la transición ecológica y digital, la salud, la competitividad, la productividad, la educación, la investigación, el crecimiento sostenible e inclusivo, y la estabilidad de los sistemas financieros (Artículo 3 del Reglamento (UE) COM (2020), 408 final, 28 mayo de 2020). Teniendo en cuenta esta doble exigencia temporal y material es necesario un triple eje de evaluación público -privada: A) La dimensión ex ante, que engloba el diseño de las políticas y la necesidad de seleccionar buenos proyectos, B) La dimensión de ejecución, garantizada mediante agentes externos capacitados para el control adecuado del uso de recursos públicos, C) La dimensión ex post, que evaluará los efectos de esas políticas e inversiones.

Una vez fijada la necesidad de este triple examen de los fondos NGEU, hay que reconocer que España cargará todo el peso del control ex ante a un Ministerio de Hacienda ya de por sí desbordado por los problemas de déficit público que ha dejado tras de sí la pandemia y un control ex post de los fondos europeos a una institución como la AIReF que carece de capacidades y recursos para dicho fin (Herrero, 2021: 23-55). Ante esta insuficiencia institucional para un análisis sobre las políticas públicas desarrolladas con los fondos NGEU, será primordial para la Administración pública utilizar todos los recursos a su alcance, siendo fundamental cubrir esa laguna jurídica y económica a través de las Universidades, convertidas en *Think Tank* solventes de análisis y control de los fondos europeos al contar con equipos interdisciplinares capaces de examinar con transparencia y buen gobierno, ex ante, con exámenes macroeconómicos de rendimiento de los proyectos y, ex post, con la rendición de cuentas de las inversiones.

#### **4. El fracaso del sector público español en la ejecución de los fondos NGEU por los déficits institucionales del Estado**

Resulta oportuno analizar con detalle el estado de situación relativo al avance de la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia presentado por el Gobierno de España: “El Plan España Puede”, que recibió el visto bueno de la comisión el 16 de junio de 2021. Actualmente se está implementando el primer tramo de los 140.000 mil millones de euros, cuyo importe asciende a 69.528 millones de euros, bajo la modalidad de subvenciones a fondo perdido, a pesar de que el Plan se extiende hasta 2026, hay que ser conscientes que un 70% de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia ha de comprometerse en el periodo 2021-2023. A esto hay que añadir el volumen de Fondos Estructurales que recibirá adicionalmente España durante el nuevo periodo presupuestario de la Unión Europea 2021-2027 que ascenderá a 44.000 millones de euros, totalizando así cerca de 200.000 mil millones (Cantalapiedra y Domínguez, 2021: 1-8). Este caudal de dinero proveniente de la UE no tiene un precedente muy halagüeño en la implementación, pues España acumula muchos retrasos en seleccionar, certificar y ejecutar esos fondos, ocupaba la quinta peor posición de la eurozona, con más de 130 días transcurridos entre la última oferta y la resolución del contrato. Con este precedente tan preocupante, llegaba en 2021 el primer pago en concepto de prefinanciación por valor de 9.037 millones de euros, para cubrir estos objetivos el Gobierno de España aprobó la Ley 7/2021 de 20 de mayo, de Cambio Climático y Transición energética. También se aprobaba la adopción de la Estrategia de Economía Circular, así como la adopción de la Agenda Digital de España 2025. Esta implosión legislativa ha llevado al Gobierno a una estrategia fiscal ciertamente arriesgada anticipando estos recursos prometidos por la Comisión, a través de la emisión de deuda pública, incorporándolos en los Presupuestos Generales del Estado; además esta enorme precipitación sin la necesaria colaboración público-privada, con una Administración desbordada por falta de recursos no solo humanos sino técnicos, ha conducido a que el año 2021, las políticas de estímulo hayan sido decepcionantes: en el ámbito de “infraestructuras y ecosistemas resilientes”, se han aplicado menos de la mitad de los 1.353 millones de euros presupuestados, sobre la “Transición energética justa e inclusiva”, el nivel de ejecución se estima que está por debajo del 40%. Este fracaso no solamente es achacable al Estado, pues las Comunidades Autónomas que tenían asignado: “Despliegue e integración de energías renovables” con una dotación de 1.900 millones de euros de los que el Gobierno sólo ha transferido el 53% de los fondos 960 millones de euros, de los que han licitado únicamente 722,86 millones de euros” (Elizondo, 2022). En conjunto según las estimaciones del Banco de España en el 2021 se absorbieron 11.602 millones de euros de los fondos Next Generation muy lejos del máximo previsto, este fracaso de expectativas ha conducido a los

Presupuestos Generales del Estado para 2022 que contempla 26.900 millones de euros para el “Plan España Puede” a incorporar el dinero no ejecutado durante 2021 unos 12.000 millones euros (SEGP, 2021).

Una vez que se ha constatado la defraudación de expectativas, sería bueno analizar por qué se ha producido este fracaso. Parte de ese fracaso se ha debido a la pobreza institucional, siendo esta decisiva en cualquier economía como ha demostrado a través de sus estudios econométricos Rodrik, Subramanian y Trebbi, que han sostenido que “la calidad de las Instituciones” se impone a cualquiera de los otros componentes necesarios para el crecimiento económico (Rodrik, Subramanian y Trebbi, 2004: 131-165). La presencia de estos fallos institucionales significativos está mermando de forma significativa la implementación de los fondos Next Generation que se pueden convertir en un lastre para el conjunto de la economía española; una de las anomalías más significativa en las instituciones públicas, sea la regulación excesivamente compleja que está desembocando en una estructura minifundista del modelo empresarial, escasamente competitivo y productivo (95% del total de las empresas); a lo que se añade el factor de distorsión generado por una producción legislativa nacida de 15 parlamentos autonómicos que genera un 70% de las normas aprobadas en España, provocando un sin fin de barreras jurídicas, desembocando finalmente en un mercado sin unidad que llevó a la Comisión Europea a denunciar: *“las restricciones y la fragmentación de la regulación dentro de España evita que las empresas se beneficien de las economías de escala”* (Comisión Europea, 2019). A esta inestabilidad institucional se unen los problemas de distribución del poder fiscal con un modelo de financiación autonómico muy poco eficiente aprobado en 2009, que incrementa más aún el déficit institucional de la economía española (Martínez, Tranchez y Sanz, 2019: 89-106). Estos problemas institucionales previos se potenciaron con la pandemia que mostró con dramática claridad que su capacidad institucional era muy débil: incapacidad para la adquisición material básico, la falta de agilidad de los programas de ayuda ERTE, la inexistencia de rastreadores efectivos o la simple gestión de los datos, que mostraban los graves déficits institucionales (Sebastián, 2020). Estos problemas estructurales del Estado limitan sobre manera la capacidad del Estado para afrontar las dos grandes transformaciones estructurales: la digital y la medioambiental, que exigirá su papel dinamizador para implementar el gran Plan de Inversiones NGEU que está obligando a gestionar programas públicos de enorme dimensión y con una gran capacidad para cambiar las dinámicas profundas de la economía, en un tiempo muy corto (cinco años), para las que sin duda el Estado español no está preparado, esto exigirá la cooperación pública-privada cediendo a las empresas de infraestructuras, tecnológicas y estratégicas más internacionalizadas su desarrollo, porque si se quiere una buena gestión de los fondos hay que ser conscientes de que deben ser los directivos de las grandes empresas los que diseñen

e implementan el modelo organizativo profesionalizado, con incentivos claros y con una clara autonomía en la toma de decisiones, siendo las instituciones públicas las encargadas de los mecanismos de control. De no ser así será letal para la economía española, siendo muy valiosas las palabras De Francis Fukuyama que ha destacado que lo que marcará la diferencia en esta crisis, es el liderazgo político y las capacidades del Estado, allí donde fallen:

La indignación popular aumentará, y frustrar las crecientes expectativas de los ciudadanos es, en última instancia, una receta clásica para la revolución. Los desesperados tratarán de emigrar, los líderes demagógicos explotarán la situación para tomar el poder, los políticos corruptos aprovecharán la oportunidad para robar lo que puedan y muchos gobiernos tomarán medidas drásticas o se derrumbarán (Fukuyama, 2020).

## **5. Universidades como nexo unión de ambos hemisferios y como mecanismo de control de los fondos Next Generation EU**

Los organismos internacionales han señalado como una de las deficiencias del sistema de innovación español se debe al escaso desarrollo de la colaboración entre empresas y las universidades, esto ha provocado que las empresas valorasen más los datos que provienen de los clientes, promovedores y competidores, que la que procede de las universidades para así poder construir un sistema de innovación competitivo. El problema es que esta falta de cooperación entre las universidades y la industria, para la generación de un capital social y la configuración de una red de conocimiento valiosa, que facilitó la innovación empresarial, para tratar así de corregir los fallos de mercado derivados de las características del bien público.

Como han explicado los investigadores Etzkowitz y Leydesdorff (2000: 109-123), ha influido en el proceso de innovación entre la universidad y la empresa, no limitarse únicamente al registro de patentes de las Oficinas de Transferencia y Resultados de la investigación de las universidades, sino que el trayecto inexplorado es el conocimiento más avanzado de la investigación básica, especialmente en los aspectos jurídico-constitucionales sobre la evolución de los Derechos Fundamentales que nos exigirán no marginar a millones de ciudadanos en esta Revolución tecnológica y medio ambiental. Por esta razón, los fondos NGEU son un enorme incentivo para que las universidades se conviertan en un activo estratégico para España a través de un espíritu emprendedor de su personal de investigación que intente ir más allá de la etapa de I+D, ayudando a las empresas españolas a ser más innovadoras favoreciendo a consumidores, proveedores y competidores. Por ello, la Comisión Europea ha diseñado su *"Estrategia de Especialización Inteligente"*, recomendando a los Estados miembros que aprovechen el conocimiento específico y el potencial endógeno que tiene cada Estado miembro para obtener una ventaja competitiva.

Ahora bien ¿cuáles son los obstáculos en España para esta colaboración? Existe una falta de apoyo no solo del sector privado, sino del sector público que concentra sus inversiones únicamente en Cataluña, País Vasco y Madrid; además las Universidades tampoco apuestan por ese binomio, universidad-industria como apuesta clave para el crecimiento sostenible e inteligente (Orazbayeva, Plewa, Davey y Muros, 2019: 67-80). Esta colaboración tan débil se debe reactivar con una elevada interacción, convirtiendo a las Universidades en las principales certificadoras de calidad de los fondos europeos Next Generation EU y de los fondos del nuevo programa de investigación e innovación de la UE para el periodo 2021-2027, pues son el principal ecosistema innovador con el que contamos para reducir la brecha de investigación en España que fortalezca el Espacio Europeo de Investigación a través de lo que Etzkowitz ha definido como la “Segunda Revolución Académica”, donde la Universidad debe contribuir al desarrollo económico como semillero o incubadora de nuevas empresas a través de la interacción entre académicos e industrias, es decir, la colaboración a través de una triple hélice que incluya: Estado, Universidad, Industria. Con esto se lograría el acceso a fuentes de financiación para la investigación adicionales a los tradicionales fondos públicos que proporcionaría una mayor estabilidad para retener al personal de investigación, mejor acceso a las tecnologías que por estar patentadas están en manos de la industria, además la sociedad visualizaría los productos finales de la investigación universitaria y de sus resultados de investigación como contribución clara al desarrollo social, y por último, el acceso a los mejores académicos altamente cualificados que permitan no solo nuevas patentes sino nuevos modelos productivos capaces de servir a las comunidades constitucionales europeas y latinoamericanas en pleno desafío a los valores compartidos en defensa de los Derechos Humanos.

Partiendo de estos defectos del modelo universitario no solo español sino europeo, se hace imprescindible construir un nuevo modelo de universidad en Europa, que deje de vivir de espaldas a Iberoamérica, en busca de este objetivo se debe potenciar el acuerdo histórico alcanzado por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y la Universidad de Salamanca, que creo la “Oficina de Cooperación Universitaria Iberoamericana Europa”, para impulsar la cooperación entre ambos hemisferios, creando un espacio común Euro—Latinoamericano y Caribeño de educación superior, ciencia, tecnología e innovación. Con una apuesta por el talento de la región estableciendo un “Espacio Iberoamericano de Conocimiento” (EIC), desde donde se debería diseñar el proceso de desarrollo sostenible, transversal, sistémico entre ambas áreas económicas que les permita el liderazgo mundial en el desarrollo sostenible, con acciones específicas orientadas a la innovación productiva, pública y social. De esta forma las universidades se deberán convertir en el nexo de unión de ambos hemisferios para obtener los beneficios económicos a largo plazo de la transición energética, desarrollando y consolidando ecosistemas de innovación, impulsando la

implementación de la “Estrategia Iberoamericana de Innovación”, aprobada en la XXVII cumbre iberoamericana de jefes de Estado y Gobierno celebrada en Andorra, el 21 de abril de 2021, en la que se estableció la implementación de una “Agenda Digital Iberoamericana”.

En definitiva, la economía mundial del siglo XXI no se podrá construir de espaldas a Iberoamérica, no solo por su enorme riqueza de materias primas y energéticas, sino por su gigantesco capital humano. Con base en ello, si queremos que el Pacto Verde Europeo sea un éxito, nos exigirá reforzar los vínculos birregionales, siendo una gran oportunidad la celebración del VI Congreso Iberoamericano del CEAPI (Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica) que se celebrará el 31 de mayo de 2023 en Madrid y que tiene un propósito claro y preciso, convirtiendo a España en el centro geopolítico de la alianza euro—iberoamericana.

## **6. La participación en los fondos Next Generation EU de América Latina y El Caribe por medio de una alianza con España a través del diseño de un PERTE**

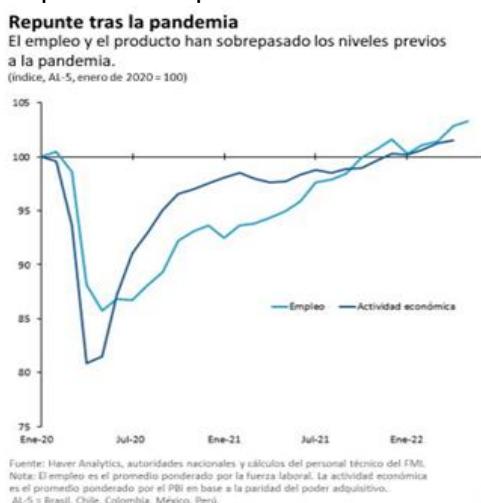
No es ocioso recordar que España se ha convertido en una gran potencia inversora, con un stock de inversiones extranjeras directas de 751.000 millones de dólares, que le sitúan en el décimo primer lugar a nivel mundial, y la décimo tercera en inversiones directas en el exterior con 606.000 millones de dólares (ICEX, 2021a).

De esta inversión en el exterior destaca Latinoamérica, donde las empresas del Ibex-35 obtienen de promedio, el 25% de sus beneficios (Sánchez, 2021). Este dato incuestionable determina donde se encuentran las inversiones más rentables para España, teniendo en cuenta las incertidumbres sobre el poder económico del mundo que está en plena revolución, obligándonos a aprovechar estas ventajas comparativas. Las empresas españolas por su propia historia de internacionalización, tienen claro que América Latina y el Caribe en la actual coyuntura deberá ser un socio privilegiado de la UE que definitivamente termine con los prejuicios y tópicos de los países europeos hacia la región, por problemas a los que Europa tampoco es ajeno, o no existe en la eurozona inseguridad ciudadana, desigualdades, inestabilidad política y económica. Hay que empezar a desterrar esta superioridad europea que España por la realidad de los hechos hace ya una década dejó atrás esos clichés, con una apuesta decidida por la región en forma de inversión (ICEX, 2021b). Asimismo y gracias a la tradición Española, desde hace mucho tiempo no existe una región en el mundo con la que se compartan más valores sociales, demográficos, culturales, científicos y tecnológicos, que en muchos casos son hurtados a las opiniones públicas de muchos países europeos, especialmente en el norte, que tienen una visión paternalista y

profundamente equivocada del continente, por el que siguen mostrando únicamente interés por la figura del “*mito del buen salvaje*” o por la simplificación de convertir a Latinoamérica en un laboratorio de su ingeniería política, por ser una “*potencia revolucionaria de los sectores oprimidos*” que ha terminado distorsionando una correcta valoración de una región vital para la cohesión social europea.

Ahora bien, existe una debilidad propia marcada por los recelos y la falta de coordinación, que va en aumento entre los países de América Latina y el Caribe, y que condiciona la geoestrategia de la región por falta de protagonismo de las relaciones multilaterales. Esta disgregación ha sido potenciada por el desembarco de China en la región, que a través de su política extractiva plagada de promesas incumplidas y de créditos leoninos, que lejos de fomentar la integración regional, ha terminado profundizando cambios estructurales que han disociado aún más a la región, completamente polarizada por el cuestionamiento de la institucionalidad democrática, a rebufo de la cual, se está llevando a la irrelevancia a los organismos multilaterales de integración regional: CELAC, UNASUR, PROSUR, o el ALABA.

Esta falta de objetivos comunes se produce en el peor momento, pues la solidez de la recuperación tras la pandemia no ha sido uniforme, aun cuando los precios de las materias primas están viviendo una época dorada tras la invasión de Ucrania, esa tendencia no se mantendrá por mucho tiempo y comenzará a revertir, a medida que las condiciones financieras globales empiecen a ser más restrictivas por el endurecimiento de la política monetaria de los Bancos Centrales. Este cambio de escenario macroeconómico global, está afectando al crecimiento económico de la región, que para el 2022 será solo del 3%, empeorando la previsión en 2023, con un crecimiento de solo el 2%; aun así, el empleo y el PIB han superado los niveles previos a la pandemia como muestra el gráfico:



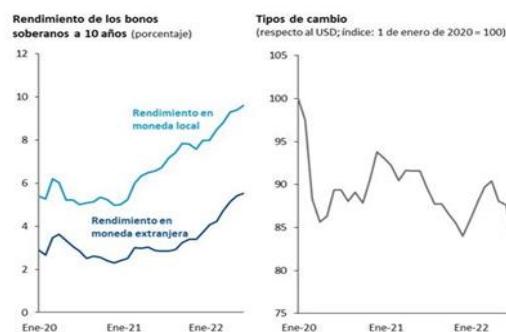
IMF

A pesar de esta leve recuperación post pandemia, gracias al repunte del precio de las materias primas, con la contracción monetaria mundial por unas condiciones financieras más restrictivas, se incrementarán los costes de endeudamiento, así como las presiones inflacionarias, agravando los problemas históricos de la región como muestra el gráfico:



Al igual que en las otras áreas económicas del mundo, para América Latina y el Caribe, con una inflación persistente de un 12,1% para 2022 y de un 8,7% para 2023, representa la tasa más elevada de los últimos 25 años en la región, que debilitará aún más las monedas locales, afectando sobre manera a los ingresos reales de los más vulnerables, así como un aumento de los costes de financiación de las finanzas públicas a las que será difícil preservar su credibilidad y recomponer el espacio fiscal, por una inflación persistente a largo plazo como muestra el gráfico:

**Condiciones financieras más restrictivas**  
La contracción monetaria y la incertidumbre están incrementando los costos de endeudamiento y las presiones cambiarias en AL-5.



Este cuadro macroeconómico de la región terminará aumentando los precios de la energía y los alimentos, elevando la pobreza de América Latina y el Caribe al 33,7%, lo que equivale en este 2022, a 22 millones de personas, y la pobreza extrema al 14,9%, según informa la CEPAL (Laborde, 2022).

Estos niveles de pobreza están disparando el riesgo político de la región, por unos gobernantes electos que están erosionando las Instituciones y la Libertad, como lo refleja IPSOS Global Advisor, que certifica además que cinco de las principales economías de América Latina y el Caribe: Chile, Colombia, Perú, Brasil y Argentina, están entre los ocho países que lideran el índice del populismo mundial. Esta degradación de los Derechos Humanos, viene a confirmar una tendencia global, marcada por la crisis de los órdenes constitucionales liberales, alentada por China y Rusia que están intentando replicar su modelo autocrático en la región muy permeable a experimentos político-económicos externos. Ambos países están poniendo en jaque el orden internacional caracterizado por el Estado de Derecho, la democracia, los Derechos Humanos, la seguridad colectiva y la existencia de organismos multilaterales que provean bienes públicos (Lake, D et al... 2021: 225-257). Este cuestionamiento del orden internacional multilateral se ha hecho aprovechando las consecuencias de la pandemia en la región, aun cuando su origen había sido China, para lavar su imagen pública inicio la llamada *“Diplomacia de las Vacunas y de las Mascarillas”*, hacia América Latina y el Caribe. Ahora bien más allá de la propaganda mediática China, esta aunque se desconozca por la opinión pública latinoamericana, terminó siendo simbólica, pues la realidad es que de 112 millones de dosis entregados, solo 13 millones se donaron (11 millones a República Dominicana y 1,8 millones a Venezuela), en definitiva, los únicos beneficiados fueron los laboratorios chinos, con una vacuna de una efectividad muy baja del 50,4% frente al 97% Pfizer, esta baja efectividad ha sido reconocida por, Gao Fu, el *“Director de los Centros para el Control de Enfermedades Chino”*.<sup>2</sup>

Frente a este cúmulo de propaganda, la UE, el 22 de junio de 2022, de la mano del Gobierno de España ponía en marcha una *“Asociación entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe para la Fabricación local de Vacunas, Medicamentos y otras Tecnologías Sanitarias”*, de esta forma se busca fortalecer los vínculos sociales económicos y científicos de ambas regiones, dentro del marco estratégico *“Global Gateway”* de la UE para profundizar en la región, no solo la inversión en salud, sino aportar innovación en el sector privado que les ayude a diversificar sus cadenas de valor, reforzando los vínculos científicos,

<sup>2</sup> BBC News. (2021a, 28/4/21). Cuáles son las vacunas chinas que se aplican en América Latina y qué dicen los resultados de la vacunación sobre su eficacia. BBC News. Retrieved from <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-56907600>

BBC News. (2021b, 7/5/21). Sinopharm: la OMS aprueba el uso de emergencia de la vacuna china contra el coronavirus. BBC News. Retrieved from <https://www.bbc.com/mundo/noticias-57029503>

tecnológicos y humanos entre Europa y América Latina y el Caribe.<sup>3</sup> Estas profundas diferencias de trato entre la UE y China, deberían de ser tenidas en cuenta, por América Latina y el Caribe en su apuesta geoestratégica para los próximos años; y a su vez la UE debería profundizar su apuesta por la región, siendo una oportunidad de oro para España para reforzar esta alianza a través de los fondos Next Generation EU, que se han convertido en un paso gigante en el proceso de integración europea, al suplir dos de sus carencias fundamentales del encaje institucional: en primer lugar, por la falta de elementos fiscales estabilizadores supranacionales; y en segundo lugar, la escasez relativa de activos seguros en euros (D'Alfonso, A. et al... 2021). A pesar de venir a suplir estas carencias estructurales, hay una elevada incertidumbre sobre el impacto global de los fondos Next Generation EU que dependerá de la capacidad de implementación, sí serán suficientes y sí realmente se producirán impactos sobre el crecimiento potencial de la UE, o por contra, solo se tratará de un nuevo estímulo a la demanda que no solo será transitorio, sino que termine agravando la inflación por una crisis de gasto agregado. Si España quiere que los proyectos elegidos, exploten sinergias entre la inversión pública y privada utilizando el “*Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia*”, el Gobierno de España debería crear un “*Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica*” (conocido como PERTEs) que favorezca la colaboración con empresas privadas de América Latina y el Caribe para el desarrollo de proyectos geoeconómicos conjuntos sobre energías renovables, hidrógeno verde y su almacenamiento, así como sobre la seguridad alimentaria e investigación tecnológica en semiconductores que potenciará el crecimiento económico de ambas regiones y recordara a Bruselas que Latinoamérica será una región geoestratégicamente vital para el objetivo verde de transformación económica.

Esta apuesta no haría en el vacío, pues las empresas españolas llevan una década mirando al otro lado del Atlántico para la generación eléctrica con energías renovables, explotación y exploración de gas y petróleo y productos derivados, pasando por la construcción de grandes infraestructuras, suministros y redes de transporte, así como intercambios comerciales, y una apuesta decidida por el sistema financiero que como muestra el mapa sitúa a España en la vanguardia de las renovadas relaciones institucionales que Bruselas pretende establecer con la región en su Pacto Verde Europeo:

<sup>3</sup> Comunicado de prensa de la Representación en España de la Comisión Europea. “Asociación entre la UE y América Latina y el Caribe: fabricación de vacunas, medicamentos y tecnologías sanitarias y refuerzo de los sistemas sanitarios” 23/06/2022



A este posicionamiento de las empresas españolas en Latinoamérica se une que las empresas latinoamericanas han convertido a España en un sólido y consolidado destino de su inversión para instalarse y crecer en nuestro país, por esa creciente bilateralidad inversora que desde 2010 ha experimentado un crecimiento del 92%. Actualmente esta asciende a más de 63.332 millones de euros, un 12,1% de la Inversión Directa Extranjera, convirtiendo a la región en el cuarto mayor inversor, solo por detrás de EEUU, Reino Unido, y Francia.<sup>4</sup>

Partiendo de esta estrecha relación, es necesario en la implementación de los fondos Next Generation EU una estrategia de “*Joint Ventures*” para la realización de operaciones Intragrupo, de esta forma compañías españolas y latinoamericanas pueden optar por alianzas estratégicas, para acometer proyectos de energía verde o infraestructuras, implementados con estos fondos europeos, compartiendo riesgos, talento, experiencia de mercado, acceso a la tecnología, mejoras en la oferta comercial, poder de negociación como grupo, economías de escala y agregación de volúmenes de venta. Esta colaboración se vería

<sup>4</sup> Son los datos del IV informe Global LATAM 2021, un proyecto liderado por ICEX-Invest in Spain y la secretaría general Iberoamericana (SEGIB) que tiene como objetivo analizar los flujos de inversión extranjera desde América Latina hacia el exterior.

favorecida por el régimen fiscal español de la “*Entidad de Tenencia de Valores Extranjeros*”, (ETVEs) que es especialmente beneficioso para estos Holding Internacionales disminuyendo los costes de estructura. En definitiva, acometiendo estos acuerdos entre empresas de ambos hemisferios para la ejecución de parte de los fondos Next Generation EU a través del diseño de un PERTEs específico de colaboración, pero además por medio de ETVEs se tendrían tres grandes ventajas fiscales: la primera, con la aplicación de esta normativa se permitiría aplicarles el método de exención al 95% de los dividendos y las ganancias patrimoniales, derivadas de la tenencia de valores representativos de los fondos propios de entidades no residentes. En segundo lugar, la retención a la que se somete a los dividendos y ganancias patrimoniales en el país de origen se calcularían con base en los “*Convenios de doble imposición*” (CDI) firmados por España, siendo América Latina y el Caribe la región del mundo con la que más convenios se han firmado. Y, en tercer lugar, los dividendos distribuidos por las ETVEs y las ganancias patrimoniales no se someterían a Tributación en España.

Estas tres grandes ventajas fiscales convierten a España en la opción idónea para triangular operaciones de inversión con Latinoamérica, con los fondos Next Generation EU como trampolín, a lo que se sumaría la reducción del impacto fiscal de las operaciones y la posterior repatriación de beneficios y dividendos, esta forma se lograría un doble objetivo: en primer lugar, desterrar el estigma extractivo que arrastra la región desde hace un década, con la participación activa en los fondos Next Generation EU; y en segundo lugar, acometer por empresas de ambos hemisferios proyectos muy ambiciosos de desarrollo energético y tecnológico verde, que lograría convertir ambas regiones en el puntal geoestratégico y geoeconómico de desarrollo sostenible a nivel global.

## Conclusiones

Esta colaboración entre corporaciones españolas y latinoamericanas deberá tener a las universidades de ambos lados del Atlántico como nexo de unión de la transferencia de resultados, y esto no solo sería fundamental para España, con una implementación de los fondos Next Generation EU desafinante en el campo de la innovación y la transferencia de tecnología, sino y lo que es más importante para la eurozona, que encontraría un socio fiable para el proceso de enorme complejidad que es la transición verde hacia una economía descarbonizada, una vez que el proyecto alemán de integración hacia el este, con el gas ruso como baluarte, ha sido un completo fracaso, marcado a sangre sobre la población ucraniana.

Ante este nuevo escenario geopolítico, la UE debe buscar de forma urgente un nuevo actor global fiable en el suministro de materias primas para su transición verde, que permita recuperar un crecimiento económico sostenible a largo plazo para la eurozona, ya que si se

analiza la evolución del crecimiento económico en la eurozona, arroja un descenso continuado que comenzó en 2009, donde el PIB de la eurozona cayó un -4,5% hasta el 2013, donde la caída de promedió fue de un -0,26% anual. Tras esta caída estrepitosa la recuperación no se consolidó en el periodo 2013-2017, pues el crecimiento promedio del PIB de la eurozona apenas logró el 1,43%, esta debilidad económica por falta de dinamismo ha provocado que la participación de la eurozona en el PIB mundial este cayendo a plomo, al pasar de ser entre 2003–2008 de un 23%, ha en 2015 apenas alcanzar el 15-16%, como dejó claro el FMI en 2020. Esta caída del peso económico de la eurozona en el PIB mundial ha disparado la incertidumbre en torno a las políticas fiscales, regulatorias, monetarias, a la que se suma, tras la invasión de Ucrania, el riesgo geopolítico por su dependencia energética. Lograr esta independencia solo será posible con la integración efectiva y real de América Latina y el Caribe en el mercado común de la eurozona a través de la potenciación del “Acuerdo de Libre Comercio UE—MERCOSUR”, pero mientras esto se produce España tiene la obligación no solo Política, sino moral de guiar este proceso, siendo los fondos Next Generation EU una oportunidad extraordinaria para España, de por fin, hacer sentir que América Latina y el Caribe que tienen voz propia en el ámbito internacional, y capacidad de competir en esta nueva revolución tecnológica, por compartir unos valores comunes, teorizados por la Universidad de Salamanca en el siglo XVI, donde el “Derecho de Gentes” se convertía en el origen de los Derechos Humanos, que deberá una vez más guiar este proceso de integración geoeconómica y geopolítica, sin el cual, digámoslo alto y claro, Europa nunca tendrá autonomía geoestratégica ni logrará el ansiado Pacto Verde Europeo.

## Fuentes de consulta

D'Alfonso, A., Delivorias A., Milotay N. y Sapala, M. (enero 2021). *Economic and Budgetary Outlook for the European Union 2021*. EPRS European Parliamentary Research Service. Recuperado de <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5005dee0-6ce3-11eb-aeb5-01aa75ed71a1>

Bertranou, J. (2019). El seguimiento y la evaluación de políticas públicas, modelos disponibles para producir conocimiento y mejorar el desempeño de las intervenciones públicas. *Revista Digital de Ciencias Sociales*, 6(10), pp. 151-188. Recuperado de <https://www.redalyc.org/journal/5258/525866950008/html/>

Casilda Bejar, R. (2021). La activación del tejido empresarial español desde el pacto verde de la Unión Europea. *ICE*, (3131), pp. 73-91. Recuperado de <https://t.co/taYoUUEYSw?amp=1>

Cantalapiedra, C. y Domínguez, A. M. (2021). El desempeño reciente de España en la implementación de los fondos de recuperación y expectativas para 2022. *ICE*, (285), pp. 1-8. Recuperado de <https://www.funcas.es/articulos/el-desempeno-reciente-de-espana-en-la-implementacion-de-los-fondos-de-recuperacion-y-expectativas-para-2022/>

Casado, J. M. y Del Pino, E. (2021). Evolución, situación actual y retos de la evaluación de políticas públicas en las Administraciones españolas. *ICE*, (102), pp. 14-36. Recuperado de <https://www.sciencegate.app/document/10.32796/cice.2021.102.7308>

Díaz Mora, C., Gandoy Juste, R. y González Díaz, B. (2020). El momento de las cadenas regionales de valor: la integración comercial en la península ibérica. *ICE*, (100), pp. 11-33. Recuperado de [www.revistasice.com/index.php/CICE/article/view/7116](http://www.revistasice.com/index.php/CICE/article/view/7116)

Elizondo, M. (2 de febrero de 2022). El Gobierno y las CCAA licitan 960 millones y adjudican 1.370 millones en fondos del Plan Recuperación en enero. *Invertia. El español*.

Recuperado de [https://www.elespanol.com/invertia/20220202/gobierno-ccaa-llicitan-millones-adjudican-plan-recuperacion/646935742\\_0.html](https://www.elespanol.com/invertia/20220202/gobierno-ccaa-llicitan-millones-adjudican-plan-recuperacion/646935742_0.html)

Etzkowitz H. y Leydesdorff L. (2000). The dynamics of innovation: from National Systems and "Mode 2" to a triple Helix of university-industry-government relations. *Research Policy*, 29(2), pp. 109-123. Recuperado de [https://doi.org/10.1016/S0048-7333\(99\)00055-4](https://doi.org/10.1016/S0048-7333(99)00055-4)

Feás, E. (2021). La estrategia de política comercial de la UE y sus implicaciones para España. *Ánalisis Del Real Instituto Elcano (ARI)*, (79). Recuperado de <https://www.realinstitutoelcano.org/analisis/la-estrategia-de-politica-comercial-de-la-ue-y-sus-implicaciones-para-espana/#:~:text=La%20estrategia%20de%20política%20comercial%20de%20la%20UE,Resumen%20...%203%20Análisis%20...%204%20Conclusiones%20>

Fukuyama, F. (2000). The pandemic and Political order. It takes a State. *Foreign Affairs*. Recuperado de <https://www.foreignaffairs.com/articles/world/2020-06-09/pandemic-and-political-order>

Geringer, J.M., Tallman, S. y Olsen, D. M. (2000). Product an international diversification among Japanese multinational firms. *Strategic Management Journal*, 21(1), pp. 51-81. Recuperado de [http://dx.doi.org/10.1002/\(SICI\)1097-0266\(200001\)21:1%3C51::AID-SMJ77%3E3.0.CO;2-K](http://dx.doi.org/10.1002/(SICI)1097-0266(200001)21:1%3C51::AID-SMJ77%3E3.0.CO;2-K)

Herrero Sánchez, C. (2021, mayo). Gestión de recursos públicos y evaluación: un binomio inseparable. *ICE*, (3125), pp. 23-35.

ICEX. (2021a). *Invest in Spain, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo*. Gobierno de España. Recuperado de <https://www.investinspain.org/en/index>.

ICEX. (2021b). *Global Latam, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo*. Gobierno de España. Recuperado de <https://www.investinspain.org/en/index>.

Laborde, A. (7 de junio de 2022). La pobreza de América Latina alcanzará el 33% en 2022. *El País*. Recuperado de <https://elpais.com/chile/2022-06-06/la-pobreza-en-america-latina-alcanzara-el-33-en-2022.html>

Lake, D. A., Martin, L. y Thomas, R. (2021). Challenges to the Liberal Order: Reflections on International Organization. *International Organization*, 75(2), pp. 225–257. <http://dx.doi.org/10.1017/S0020818320000636>

Martín Pascual, E. (2020). El pacto verde europeo. ¿Posible salida verde de la crisis de la COVID-19? *Revista General de Derecho Europeo*, (51).

Martínez Vázquez, J., Tranchez Martin, J. M. y Sanz Arceaga, E. (2019). A propósito del informe de la Comisión de expertos para la revisión del modelo de financiación autonómica: oportunidades para un sistema más eficiente. *Presupuesto y Gasto Público*, (96), pp. 89-106. Recuperado de [https://www.ief.es/docs/destacados/publicaciones/revistas/pgp/96\\_04.pdf](https://www.ief.es/docs/destacados/publicaciones/revistas/pgp/96_04.pdf)

Orazbayeva B., Plewa C., Davey T. y Muros V. (2019). The future of University-Business Cooperation: research and practice priorities. *Journal of Engineering and Technology Management*, (54), pp. 67-80. Recuperado de <https://doi.org/10.1016/j.jengtecman.2019.10.001>

Rodrik, D., Subramanian, A. y Trebbi, F. (noviembre de 2002). Institutions Rule: The primacy of institutions over geography and integration in economic development. *Journal of Economic Growth*, 9 (2), pp. 131-165. Recuperado de <https://doi.org/10.3386/w9305>

Sánchez Silva, C. (13 de marzo de 2021). Las promesas incumplidas de América Latina. *El País*. Recuperado de <https://elpais.com/economia/2021-03-13/las-promesas-incumplidas-de-america-latina.html>

Secretaría del Estado de Presupuestos y Gastos. (2022). *Proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2022*. Libro Amarillo 2022.

Sebastián, C. (2020). Sobre las capacidades del Estado en España. *Agenda Pública*. *El País*. Recuperado de <https://agendapublica.elpais.com/noticia/13569/sobre-capacidades-estado-espana>

UNECE. (2019). *Country Report Spain*. Recuperado de [https://unece.org/sites/default/files/2021-03/Spain\\_CN\\_EN.pdf](https://unece.org/sites/default/files/2021-03/Spain_CN_EN.pdf)